

Cuando la violencia se disfraza de protesta



César Cifuentes

presidente regional PRI

Lo ocurrido en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, no puede relativizarse ni minimizarse. La agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao —insultos, empujones y humillación pública— no fue un hecho aislado ni un simple desborde estudiantil. Fue la expresión de algo más profundo: una forma de hacer política que, cuando no logra imponerse por la vía democrática, recurre a la presión, al amedrentamiento y, finalmente, a la violencia.

Que esto ocurra en una universidad no es un detalle menor. Las universidades debieran ser espacios de pensamiento crítico, de debate de ideas y de formación de ciudadanos. Sin embargo, lo que vimos en Valdivia fue exactamente lo contrario: intolerancia, agresión y una incapacidad absoluta de convivir con quien piensa distinto.

Aquí es donde la memoria reciente se vuelve incómoda. Durante años, desde sectores de izquierda se relativizó la violencia cuando esta servía como herramienta de presión política. Se hablaba de “expresiones sociales”, de “rabia legítima”, de “descontento acumulado”. Se condenaba en el discurso, pero se justificaba en la práctica. Y así, poco a poco, se fue instalando una peligrosa idea: que la violencia podía ser un medio válido dependiendo de quién la ejerciera y contra quién se dirigiera.

Por eso este episodio no puede analizarse de forma aislada. Porque deja en evidencia una doble vara que ha sido demasiado evidente. Cuesta no preguntarse dónde estuvo esta misma indignación en otros momentos, cuando la intimidación, la funa y la agresión parecían herramientas aceptables si el objetivo era un adversario político. Cuesta no ver que hoy existen grupos que no buscan dialogar, sino impedir que se gobierne con normalidad.

Pero hay, además, un elemento de fondo que no podemos seguir evitando: el rol que han jugado ciertos espacios universitarios en la formación de este clima. No se trata de descalificar al mundo académico en su conjunto, pero sí de reconocer una realidad incómoda. Incluso desde las propias autoridades universitarias se ha comenzado a advertir esta tensión. En conversaciones recientes, como la que sostuvo el rector de la Universidad Austral en un podcast, se ha reconocido que al interior de los campus existe un desafío real para compatibilizar el debate abierto con la radicalización de ciertos grupos.

Durante años, en distintos entornos universitarios se ha ido instalando una cultura donde la política no siempre se debate, sino que muchas veces se milita; donde la diferencia se vuelve incómoda; y donde algunos docentes, desde una posición de autoridad intelectual, terminan influyendo más allá de lo formativo. Ese fenómeno —que muchos prefieren relativizar— genera un terreno fértil para la radicalización. Porque cuando un alumno es formado en la lógica de que ciertas ideas tienen una superioridad moral incuestionable, el paso siguiente es peligroso: creer que quien piensa distinto no solo está equivocado, sino que no merece ser escuchado.

Y cuando se cruza esa línea, la protesta deja de ser una herramienta legítima y se transforma en un mecanismo de presión. Ya no se busca convencer, sino imponer. Ya no se debate, se cancela. Y en casos como el de Valdivia, directamente se agrede.

Algunos intentarán justificar lo ocurrido apelando a demandas o contextos. Pero ninguna causa convierte la violencia en argumento. Ninguna demanda mejora por humillar a una autoridad. Ninguna universidad se fortalece permitiendo que grupos minoritarios impongan el miedo como forma de acción política.

Lo más preocupante es que esto no es espontáneo. Hay sectores que han entendido que la mejor forma de debilitar a un gobierno es impedirle gobernar con normalidad. Generar presión constante, instalar conflicto, tensionar los espacios institucionales. No es una estrategia nueva, pero sí una que vuelve a aparecer con fuerza cuando el poder cambia de manos.

Chile no puede volver a normalizar esto. No puede aceptar que una ministra tenga que salir resguardada de una universidad. No puede tolerar que la violencia se disfraze de protesta ni que la intolerancia se vista de convicción.

La democracia no se defiende solo en las urnas. Se defiende también en la forma en que tratamos al otro, en la capacidad de escuchar y en el respeto a las instituciones. Y cuando eso se pierde, lo que queda no es debate ni política: es simplemente fuerza.

La pregunta de fondo es clara. ¿Queremos un país donde las ideas se enfrenten con argumentos o uno donde se impongan por presión y violencia?

Porque cuando la violencia se disfraza de protesta, la democracia siempre termina pagando la cuenta.